

Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de nulidad que se interpuso en contra de la que desestimó la demanda por cobro de prestaciones.

Segundo: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación, cuando “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte declarará inadmisibile el recurso si faltan los requisitos de los incisos primero y segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y el de acompañar copia de las sentencias respectivas.

Tercero: Que, según se expresa en el recurso, la materia de derecho que se propone para efectos de su unificación consiste en *“determinar si la norma que estableció el pago del tipo de remuneración denominado asignación de zona para los trabajadores civiles de ASMAR, esto es, el artículo 6° del DS N° 658 del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina, de 10 de diciembre de 1966, ratificado por el DL N° 1282 de 13 de diciembre de 1975, se encuentra actualmente vigente o ha sido derogada, por lo que, para su decisión es indispensable establecer cuáles son las condiciones para que una norma laboral sea derogada”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, en primer lugar, la sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol N° 4.657-2017, a propósito de un recurso de casación en el fondo, en que se estableció que ante una liquidación voluntaria conforme a la Ley N° 20.720, que fue solicitada por la deudora como empresa y no como persona natural, debe aplicarse por especialidad la Ley N° 20.027, que regula el crédito



con garantía estatal para el financiamiento de la educación superior, del que es titular la parte recurrida y, por tanto, procede excluirlo del procedimiento de liquidación voluntaria.

Y, en segundo lugar, acompañó el fallo también dictado por esta Corte en el Rol N° 27.965-2017, que resolvió que el trabajador no docente está afecto a las causales de despido previstas en el Código del Trabajo, pero también a la de salud incompatible con el desempeño del cargo, y que el artículo 4 de la Ley N° 19.464 no habilita a la demandada para declarar vacante el cargo de la actora por salud incompatible, por tratarse de una norma de reenvío de aplicación excepcional a permisos y licencias médicas.

Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada. Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustenta el fallo de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna estableció que la Ley N° 18.296 efectuó una derogación tácita y orgánica de la normativa anterior aplicable a los trabajadores civiles de ASMAR. Sin embargo, los pronunciamientos contenidos en las sentencias que fueron acompañadas se sustentan en razonamientos distintos, que dicen relación con la aplicación por especialidad de la Ley N° 20.027, que regula el crédito con aval del Estado para el financiamiento de la educación superior, respecto a la Ley N° 20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, a la que se acogió la deudora como empresa y, a la aplicación de las causales de término del Código del Trabajo al igual que la de salud irrecuperable al personal paradocente.

Séptimo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de



la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia veinticinco de julio de dos mil veintidós.

Regístrese y devuélvase.

Nº 66.699-2022.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Maria Gajardo H., Diego Gonzalo Simpertigue L. Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a ocho de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

